

Santiago, treinta de diciembre de dos mil nueve.

Por cumplida la medida para mejor resolver y encontrándose acordado el fallo se designa redactor al Ministro Sr. Künsemüller.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos primero, segundo y quinto, que se eliminan.

**Y teniendo en su lugar, y además, presente:**

**Primero:** Que el recurso de amparo, en cuanto persigue vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo que concierne a la privación o amenaza de atentados contra la libertad personal y seguridad individual de las personas, es instrumento también eficaz para el control de las resoluciones que dictan los tribunales de justicia que conlleven a tal efecto, de modo que así se entiende claramente la limitación que impone para su ejercicio el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal al declarar que procede "*si no se hubiere deducido los otros recursos legales*" para reclamar la inmediata libertad o la corrección de los defectos denunciados. Por otra parte, el artículo 21 de la Carta Fundamental otorga a los ciudadanos una acción cautelar para reclamar ante la magistratura de toda privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, cualquiera sea la fuente originadora de tales menoscabos, inclusive cuando esta es una resolución expedida fuera de los casos previstos por la ley, como lo establece el artículo 306 del cuerpo legal antes citado. Por consiguiente, es perfectamente posible el examen por esta vía de un auto de procesamiento como se explicará enseguida.

**Segundo:** Que, y como es de general dominio, todo auto de procesamiento exige que por la investigación llevada a efecto en el curso de un sumario judicial penal se encuentre *justificada* la existencia del

delito que se investiga y que aparezcan *presunciones fundadas* para estimar que el inculpado ha tenido participación en él como autor, cómplice o encubridor, después que el juez haya interrogado al encausado, como lo declara el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, esto es, impone al juez que lo dicta un nivel de exigencia probatoria inferior al que es necesario cuando se pronuncia sentencia definitiva para los mismos efectos de acreditar hecho punible y grado de participación. Para el establecimiento de este último elemento, en el presente estadio procesal demanda únicamente la concurrencia de presunciones fundadas, es decir, deducidas racionalmente de hechos conocidos o manifestados en el proceso, de modo que el control en esta sede debe dirigirse fundamentalmente a velar por la concurrencia de tales requerimientos, más no a ejercer un control estricto como si se tratara de una sentencia definitiva.

Por otra parte, se debe recordar que la naturaleza y consecuencias de esta resolución son eminentemente provisionales, como surge del tenor del artículo 278 bis del Código de Procedimiento Penal, de lo que resulta que es perfectamente modificable y puede ser dejada sin efecto si así lo justifican nuevos antecedentes; además, vincula a una persona como parte del proceso, en razón de lo cual le es asegurado el uso de todos los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico en esta situación y no necesariamente le seguirá una sentencia condenatoria, pudiendo incluso, terminar mucho antes el procedimiento, si agotada la investigación, concurre algún motivo legal que lo justifique.

**Tercero:** Que el mérito de los antecedentes revisados, en cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada, que evidencian las especiales y complejas características y circunstancias de comisión del hecho punible indagado, aporta indicios diferentes y concordantes, que, en

el actual estado del proceso permiten concluir que se satisfacen las exigencias del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal.

**Cuarto:** Que las restantes alegaciones formuladas por la defensa atinentes al fondo del asunto, sobrepasan los límites que se pretenden por esta vía constitucional, y deben ser tratadas y resueltas en las etapas procesales correspondientes.

**Quinto:** Que lo razonado precedentemente permite concluir que la orden de prisión dictada en contra del amparado Pedro Valdivia Soto no resulta arbitraria o ilegal, como se pretende por el recurso deducido en su favor.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y artículo 7° Transitorio de la Ley N° 19.665, **se revoca** la resolución apelada de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, escrita de fojas 9 a 12, y, en su lugar **se rechaza** el recurso de amparo deducido en lo principal de fojas 1, **reponiéndose el auto de procesamiento** dictado en contra de Pedro Valdivia Soto, en virtud del cual se lo somete a proceso en calidad de cómplice del delito de homicidio simple en la persona de Eduardo Frei Montalva.

Se previene que el Ministro Sr. Rodríguez estuvo por instruir al Ministro Instructor que, sin perjuicio de las diligencias hasta ahora practicadas y aquellas que se dispongan, oriente también el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que se trata. Además de esclarecer alguna vinculación de las visitas intempestivas que se reprochan a este médico al paciente, con los posibles suministros de sustancias tóxicas que agravaron el estado clínico de éste.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Ballesteros, quien estuvo por confirmar la resolución en alzada, en virtud de sus propios fundamentos, con excepción de su motivo segundo.

Comuníquese por la vía más expedita, sin perjuicio, ofíciase.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Ministro Sr. Künsemüller y la prevención y voto en contra, sus autores.

Rol N°9473-09.